

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, Nueve (09) de Marzo de Dos Mil Veintiuno (2021)

Auto

**MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA**

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000- <b>2019-00877-00</b>
DEMANDANTE:	JAIRO ALBERTO RUIZ ROJAS Y OTROS <a href="mailto:gerencia@pacificorestaurant.com">gerencia@pacificorestaurant.com</a> <a href="mailto:asejuext@outlook.com">asejuext@outlook.com</a>
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL y POLICIA NACIONAL <a href="mailto:notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co">notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co</a> <a href="mailto:deval.notificacion@policia.gov.co">deval.notificacion@policia.gov.co</a>
ASUNTO	<b>REPONE Y ADMITE DEMANDA</b>

**I. OBJETO DE LA DECISION**

Se resuelve el recurso reposición propuesto por la apoderada judicial de la parte demandante, contra el auto interlocutorio del 05 de diciembre de 2019<sup>1</sup> proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la falta de competencia en razón de la cuantía y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Cali - Valle.

**II. ANTECEDENTES**

En ejercicio del medio de control de reparación directa, la parte actora solicita se declaren responsables administrativamente y extracontractualmente a las entidades demandadas, por los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes como consecuencia de la desaparición forzada, la violación a la libertad e integridad personal de la señora Ana Raquel Rojas de Ruiz el 01 de marzo de 1997 y como consecuencia de ello sean condenadas a su resarcimiento pecuniario.

Mediante providencia del 05 de diciembre de 2019 este Despacho declaró su falta de competencia para conocer del presente asunto y, ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali - Valle. Contra dicha providencia fue interpuesto oportunamente el recurso de reposición por el representante judicial de la parte actora, mediante escrito<sup>2</sup> radicado el día 16 de diciembre de 2019.

**III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO**

<sup>1</sup> Folios 90-91

<sup>2</sup> Folio 97-99

La parte demandante luego de hacer un recuento normativo, jurisprudencial y de citar al tratadista López Blanco, sustenta el recurso señalando que:

*“No es cierto que cuando se determinó el lucro cesante consolidado y se fijó en la suma de \$435.088.167 se liquidaron intereses causados por valor de \$210.393.018 y si así hubiese sido, el inciso cuarto del artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo lo permite, situación que también considera la providencia transcrita y de la interpretación que hace el tratadista Hernán Fabio López cuando se refiere a la cuantía en materia del Código General del Proceso que es perfectamente adaptable al caso que se examina, dada su similitud.*

*A pesar de que el valor determinado como lucro cesante consolidado, \$435.088.167, es superior a los 100 SMLMV, debe tenerse en cuenta para determinar la cuantía también se ha aceptado por parte de la jurisprudencia la sumatoria de los perjuicios consolidado y futuro, pues éstos hacen parte del lucro cesante, lo que nos lleva a demostrar que cuando se fijó la cuantía en \$503.229.205 es una suma superior a 500 SMLMV, valor que establece la competencia en ese Honorable Tribunal, según lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 152 del CPACA.*

*Los autos a que se refiere su Señoría no son aplicables para el caso que nos ocupa, debido a que en el auto número interno 49.745 se formulan varias pretensiones, sumándose el daño moral, los perjuicios materiales y el daño a la vida de relación para determinar la cuantía; en el auto número interno 62.963 la pretensión mayor no es superior a 500 SMLMV para la fecha en que se presentó la demanda; y, en el auto número interno 63.077 para determinar la cuantía se sumaron los daños materiales y los morales, siendo los materiales inferior a 500 SMLMV para la fecha en que se presentó la demanda”.*

#### **IV. CONSIDERACIONES**

##### **1.- Competencia**

Este Despacho es competente para resolver el recurso de reposición interpuesto, el que es de toda suerte procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la ley 1437 de 2011.

##### **2.- Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia para el conocimiento de los asuntos de reparación directa**

La ley 1437 de 2011 dispone en su numeral 6º del artículo 152, lo siguiente:

*“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:*

*6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”*



Con el fin de determinar la competencia por razón cuantía de los asuntos sometidos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 157 de la mencionada Ley procesal, dispone lo siguiente:

*"Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando, sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.*

*Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. (-)*

**La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. (...).** (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De la norma en cita, se deduce que la estimación de la cuantía para determinar la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo en procesos de Reparación Directa se establece de acuerdo con la pretensión mayor de la demanda, la cual debe superar los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, excluyendo para su determinación, los perjuicios morales (perjuicio moral subjetivo, violación de derechos fundamentales, vida en relación) cuando éstos no sean los únicos que se pidan. Así mismo, cuando en la demanda se acumulan varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor, al tiempo de presentación de la demanda.

El Consejo de Estado ha sostenido que, tratándose de perjuicios materiales, debe tomarse como pretensiones separadas el daño emergente<sup>3</sup> y el lucro cesante<sup>4</sup>, por lo cual, cada una de ellas deberá ser examinadas para determinar cuál es la mayor<sup>5</sup>.

En el presente asunto, la apoderada de la parte demandante al momento de determinar la cuantía, señaló que las pretensiones acumuladas ascienden a la suma de \$ 503.229.205, correspondiente al lucro cesante consolidado y futuro, sin incluir los perjuicios materiales, discriminados de la siguiente manera:

Por perjuicios morales:

Rigoberto de Jesus Ruiz (esposo)	300 SMLMV
Claudia Isabel Ruiz Rojas (hija)	300 SMLMV
Jairo Alberto Ruiz Rojas (hijo)	300 SMLMV
Carlos Andrés Ruiz Rojas	300 SMLMV
Jorge Ernesto Ruiz Rojas	300 SMLMV
Jairo Andrés Ruiz Valencia	150 SMLMV

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, catorce (14) de septiembre de 2017. Radicado 25000232600020050232401 (35840).  
<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, cuatro (4) de abril de 2018. Radicado 50001233100020090026401 (47838).  
<sup>5</sup> Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. CF. Guillermo Sánchez Luque, 13 de marzo de 2017, Expediente No. 57112.



Juan David Paladines Ruiz	150 SMLMV
Dolly Patricia Valencia Henao (nuera)	75 SMLMV

Por perjuicios inmateriales, consistente en las vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos constitucionales o convencionales amparados:

Rigoberto de Jesús Ruiz (esposo)	100 SMLMV
Claudia Isabel Ruiz Rojas (hija)	100 SMLMV
Jairo Alberto Ruiz Rojas (hijo)	100 SMLMV
Carlos Andrés Ruiz Rojas	100 SMLMV
Jorge Ernesto Ruiz Rojas	100 SMLMV

- Por perjuicios materiales:
- Lucro cesante consolidado: \$435.088.167.
  - Lucro cesante futuro: \$68.141.038.

Para efectos de determinar la cuantía, se hace necesario establecer el lucro cesante consolidado, conforme a la siguiente formula:

$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$	S	\$ 435.088.167,60
	VP	\$ 776.358,00
	n	271
	i	0,004867

Donde: S = es la indemnización a obtener.  
Ra = es la renta actualizada, esto es la suma de \$776.358.  
I = interés puro o técnico: 0.004867  
n = Número de meses que comprende el periodo indemnizable: desde el día de la ocurrencia de los hechos (1 de marzo de 1997) hasta la fecha de presentación de la demanda (04 de octubre de 2019), esto es 271 meses.

Se observa que el mayor valor pretendido por los demandantes es de \$435.088.167 pesos, el cual corresponde al lucro cesante consolidado, por tanto, le asiste razón a la parte recurrente, por cuanto efectivamente, le asiste competencia a este Tribunal para conocer del proceso de la referencia, ya que la cuantía estimada de las pretensiones de la demanda excede de la cuantía de 500 smlmv, esto es, \$414.058.0008<sup>6</sup>, lo que deriva en consecuencia, la revocatoria del auto No. 05 de diciembre de 2019 proferido por este Despacho.

V. DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA

ANTECEDENTES

Los señores Rigoberto de Jesús Ruiz y otros, a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Reparación Directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, solicitan se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual

<sup>6</sup> Salario mínimo legal mensual vigente 2019: \$828.116

de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional -Policía Nacional, por la perjuicios morales y materiales causados como consecuencia de la desaparición forzada de la señora Ana Raquel Rojas de Ruiz en hechos sucedidos el 01 de marzo de 1997 a la altura del kilómetro 22, por la vía Buenaventura – Loboguerrero del Departamento del Valle del Cauca.

## **1. DE LA JURISDICCIÓN**

Conforme al artículo 104 del CPACA la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

## **2. DE LA COMPETENCIA**

### **2.1. Factor funcional**

En cuanto a la competencia funcional el CPACA indica:

*"ARTICULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:*

*(...)*

*6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes."*

En el presente caso, se pretende la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Mindefensa y Policía Nacional, por los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes como consecuencia de la desaparición forzada y la violación a la libertad e integridad personal de la señora Ana Raquel Rojas de Ruiz, razón por la cual, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto.

### **2.2. Factor territorial**

En cuanto a la competencia territorial el CPACA señala:

*"ARTÍCULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:*

*(...)*

*6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante."*

Los hechos de la presente demanda sucedieron en el kilómetro 22 vía Buenaventura – Loboguerrero del Valle del Cauca, razón por la cual, es competente esta Corporación por el factor territorial para conocer del presente asunto.

### **2.3 Factor Cuantía**

El artículo 157 del CPACA señala:

*“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. <Ver Notas de Vigencia> Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.*

*Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.*

*(...)*

*La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.*

*(...)”*

Como se expuso al inicio del presente auto, se observa que el mayor valor pretendido por la actora es de \$435.088.167 pesos, cuantía que excede los 500 smlmv<sup>7</sup> establecidos en la norma transcrita, en consecuencia, esta Corporación es competente para conocer del presente asunto.

### **3. REQUISITO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL**

El Despacho advierte que antes de incoar las acciones contencioso administrativas se debe hacer la conciliación prejudicial como lo consagra el artículo 161 del CPACA:

*“ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:*

*1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.”*

A folio 87 obra constancia de agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial ante la Procuraduría 166 Judicial II para Asuntos Administrativos.

### **4. DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN**

Respecto de la caducidad de los medios de control en la interposición de reparación directa, el CPACA dispone:

*“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:*

*2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:*

*(...)*

<sup>7</sup> Salario mínimo legal mensual vigente 2019: \$828.116 x 500 = 414.058.000





Radicación : 76001-23-33-000-2019-00877-00  
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA  
Demandante : JARO ALBERTO RUIZ ROJAS Y OTROS  
Demandado : NACIÓN – MINDEFENSA – EJERCITO NACIONAL Y POLICIA NACIONAL

7

*i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. (...)."*

En el presente asunto, para la época de ocurrencia de los hechos, el artículo 136 del Decreto 01 de 1984<sup>8</sup> establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años contados a partir del día siguiente al del acaecimiento de la causa a la que se atribuye el daño, en este caso determinado por la desaparición forzada de la señora Ana Raquel Rojas de Ruiz, hechos que tuvieron lugar, según la demanda, en el año 1997.

No obstante, la ley en aplicación del principio de la seguridad jurídica, estableció límites para el ejercicio del medio de control de reparación directa, tal regulación no resulta aplicable a casos en que se discute la responsabilidad del Estado por conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera el 29 de enero de 2020 unificó su postura en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado; por tanto, para resolver si la demanda que ahora se estudia fue o no oportuna, el Despacho deberá estarse a la posición unificada por esta Corporación en la sentencia que acaba de mencionarse, en la que se expresó que:

*"... la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: **i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley**" (se destaca).*

La jurisprudencia del Alto Tribunal ha reconocido que, cuando el conteo del término de caducidad no puede ser determinado de manera clara en una etapa inicial, el juez está plenamente facultado para dar aplicación a los principios *pro actione* y *pro damnato*<sup>9</sup>, sin perjuicio de que en un momento posterior y con la verificación de todo el material probatorio se pueda determinar que existió caducidad del medio de control.

<sup>8</sup> Decreto 1 de 1984, modificado: "Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:>"(...)

<sup>9</sup> "8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa".

<sup>9</sup> Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera en auto del 2 de mayo de 2013, expediente 45.550 (M.P. Hernán Andrade Rincón) dispuso: "... Así entonces, como quiera que del material probatorio allegado no se puede establecer cuál fue la fecha de ejecutoria de la providencia que puso fin al proceso penal por el cual hoy se reclama reparación, no es posible hacer el respectivo conteo, por lo que, a fin de darle curso a la acción y con el fin de garantizar el acceso a la Administración de Justicia, **tal y como lo ha señalado esta Corporación en eventos como el descrito con anterioridad, resulta necesaria la aplicación de los principios pro actione y pro damnato, en los términos en los que de manera pacífica y reiterada se ha determinado.**" (negrilla fuera del texto). Entre otras providencias.



Radicación : 76001-23-33-000-2019-00877-00  
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA  
Demandante : JARO ALBERTO RUIZ ROJAS Y OTROS  
Demandado : NACIÓN – MINDEFENSA – EJERCITO NACIONAL Y POLICIA NACIONAL

8

Así las cosas, dado que en esta etapa del proceso no es posible determinar con certeza si se configuró o no la caducidad respecto de la pretensión de declarar la responsabilidad del Estado *-por omisión-* por la desaparición forzada de la señora Ana Raquel Rojas de Ruiz, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, se analizará el fenómeno jurídico de la caducidad en el trámite procesal oportuno o al momento de dictar sentencia.

## **5. DE LA IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y REPRESENTACION JUDICIAL**

La parte demandante se encuentra conforma por los señores RIGOBERTO DE JESUS RUIZ, CLAUDIA ISABEL RUIZ, JAIRO ALBERTO RUIZ, CARLOS ANDRES RUIZ, JORGE ERNESTO RUIZ, JUAN DAVID PALADINES RUIZ, JAIRO ANDRES RUIZ y DOLLY PATRICIA VALENCIA.

El artículo 160 del CPACA, respecto al derecho de postulación versa:

*“Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.”*

A folios 20 a 27, obran poderes conferidos por cada uno de los demandantes a la abogada BLANCA INES PRIERTO SANDOVAL, para su representación judicial dentro del presente proceso.

La entidad demandada en este caso, es la Nación – Ministerio de defensa – Ejercito Nacional y Policía Nacional, y como es una entidad pública del orden nacional, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 610 del CGP y 2º del Decreto 4085 de 2011, deberá vincularse a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, para lo cual, se le deberá notificar esta providencia al correo electrónico, conforme lo indica el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1365 de 2013.

## **6. DE LOS REQUISITOS FORMALES.**

De igual forma, la demanda cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 162 (requisitos de la demanda<sup>10</sup>), 163 (individualización de pretensiones<sup>11</sup>) y 164 (oportunidad de la demanda) de la Ley 1437 de 2011.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 806 de 2020, se requerirá a la parte demandante para que si no lo ha hecho aporte la información y documentación señalados en la referida norma<sup>12</sup>.

Por reunir los requisitos legales el Despacho,

---

<sup>10</sup> Designación de las partes: folios 1-2  
Pretensiones: folios 2-3  
Hechos y omisiones: folios 3-7  
Fundamentos de derecho: folios 7-10  
Pruebas: folio 11-17  
Estimación razonada de la cuantía: folio 17-18  
Dirección para notificación: folio 18-19

<sup>11</sup> Ver folios 2-3

<sup>12</sup> - Canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso.

- Anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.





### RESUELVE:

**PRIMERO: REPONER** el auto interlocutorio No. 05 de diciembre de 2019, por las razones expuestas anteriormente, para en su lugar proveer sobre la admisibilidad del medio de control.

**SEGUNDO: ADMITIR** la demanda del medio de control de REPARACIÓN DIRECTA, instaurada por los señores (as) **RIGOBERTO DE JESÚS RUIZ, CLAUDIA ISABEL RUIZ ROJAS, JAIRO ALBERTO RUIZ ROJAS, CARLOS ANDRÉS RUIZ ROJAS, JORGE ERNESTO RUIZ ROJAS, JAIRO ANDRES RUIZ VALENCIA, JUAN DAVID PALADINES RUIZ y DOLLY PATRICIA VALENCIA HENAO**, a través de apoderado judicial en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL y POLICIA NACIONAL**, en consecuencia, dispone:

**TERCERO: NOTIFICAR** este auto a la parte actora en la forma prevista en el **artículo 201 del CPACA modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021**, quien podrá consultarlo en la página web: [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co).

**CUARTO: NOTIFICAR** personalmente la demanda, sus anexos y la presente providencia a la parte demandada **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, POLICIA NACIONAL**, al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO** y a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, a los buzones de correo electrónico creados por dichas entidades para efecto de recibir notificaciones judiciales de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 198 y 199 del CPACA, éste último modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 del 2021.

A Las personas de derecho privado que no tengan un canal digital o de no conocerse este, se notificarán personalmente de acuerdo con el artículo 291 del Código General del Proceso concordante con el artículo 49 de la Ley 2080 de 2021.

La parte demandante deberá remitir al correo electrónico [rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co), dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, el soporte de envío de la copia de la demanda y sus anexos al demandado al buzón electrónico para notificaciones judiciales.

**QUINTO:** A las entidades demandadas **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, POLICIA NACIONAL** y al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO**, se les correrá traslado de esta demanda por el término de treinta (30) días para contestarla, proponer excepciones, pedir pruebas, llamar en garantía y en su caso, proponer demanda de reconvenición, acorde con el artículo 172 del CPACA. Este plazo se comenzará a contabilizar a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje, y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente de conformidad con lo establecido en el inciso 4º del artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 que modifico el artículo 199 del CPACA.

**SEXTO: ADVERTIR a las entidades demandadas** que, durante el tiempo para dar respuesta a la demanda, deberá allegar con la contestación, **el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación que se demanda** y se encuentre en su poder. La inobservancia de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto (artículo 175, parágrafo 1º del CPACA).



Radicación : 76001-23-33-000-2019-00877-00  
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA  
Demandante : JARO ALBERTO RUIZ ROJAS Y OTROS  
Demandado : NACIÓN – MINDEFENSA – EJERCITO NACIONAL Y POLICIA NACIONAL

10

**SEPTIMO:** Se advierte a los sujetos procesales que la contestación de la demanda y demás memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso, deberán enviarse al correo electrónico de la secretaria [rpmemorialestadmvcuca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvcuca@cendoj.ramajudicial.gov.co), con copia a los correos electrónicos de los demás sujetos procesales, **identificando el NÚMERO DE RADICADO DEL PROCESO CON LOS 23 DÍGITOS SEPARADOS POR GUIÓN, NOMBRE DEL MAGISTRADO PONENTE, NOMBRE DEL DEMANDANTE, EL ASUNTO** y de igual forma deberán indicar su canal digital conforme al artículo 37 de la Ley 2080 de 2021.

**OCTAVO:** RECONOCER PERSONERÍA para actuar, como apoderada de los demandantes, a la abogada BLANCA INES PRIETO SANDOVAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.694.792 y portadora de la tarjeta profesional No. 80.667 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos a que aluden los memoriales de poder por ella presentados<sup>13</sup>.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

(Firmado electrónicamente)

**LUZ ELENA SIERRA VALENCIA**  
**Magistrada**

---

<sup>13</sup> Folios 20-27  
Vo.Bo.Secretaria  
Ngg